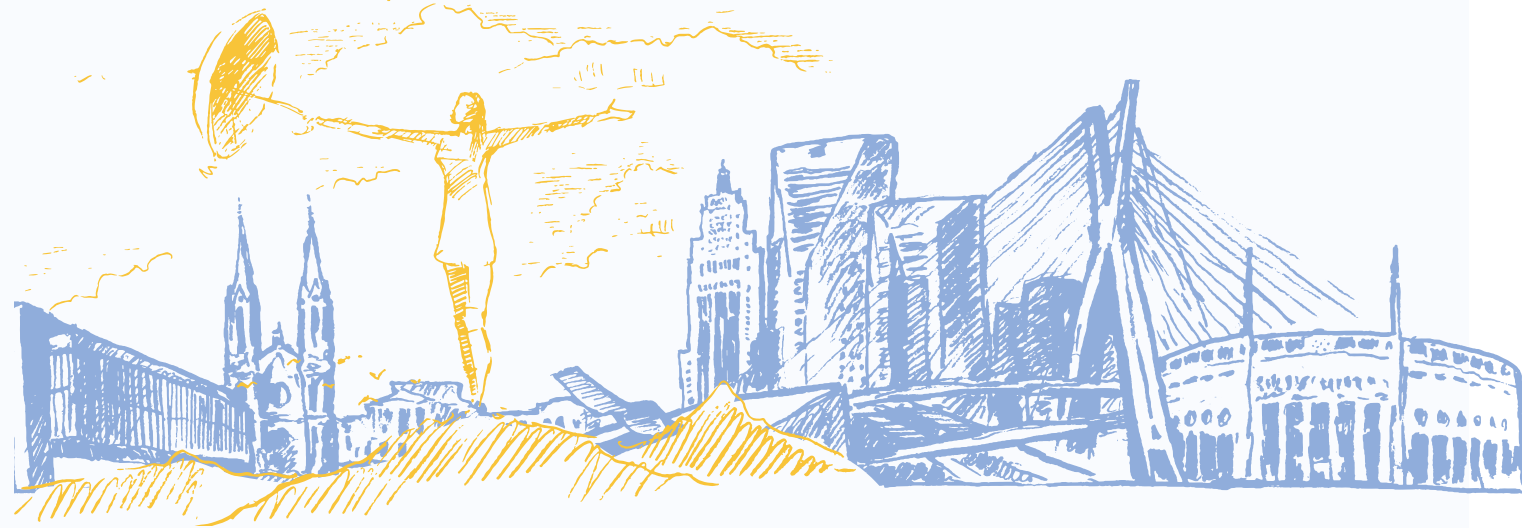


Edición 2023

CAF BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

16

CUADERNO DEL DESARROLLO



Las paradojas de la seguridad en América Latina

Charla magistral de
**Lucía
Dammert**

Diplomado en
Gobernabilidad e
Innovación Pública,
edición 2023

Temas asociados: Seguridad - Criminalidad - Delitos - Crimen organizado - América Latina y el Caribe - Homicidios - Estado - Alcaldías - Gobiernos municipales - Gobiernos regionales

Resumen

En América Latina ha habido una inversión muy alta en seguridad; sin embargo, todavía hay un conocimiento limitado del problema, que, en vez de disminuir, se vuelve más agudo y complejo. Aunque parezca que las urgencias económicas tras la pandemia tienen más relevancia, la criminalidad sigue allí. La región tiene las tasas de homicidios más altas del mundo. Las medidas coercitivas y de “mano dura” dan resultados a corto plazo, pero no ofrecen soluciones duraderas y las medidas preventivas se desarrollan con limitada sostenibilidad, generando débiles resultados.

Hallazgos

La inseguridad tiene inmensos costos para la ciudadanía y los Estados. Hay que girar el foco a la prevención bien diseñada e implementada, más que al castigo y concentrarse en la visión local de la criminalidad: cada territorio en un país tiene su propia complejidad. Las respuestas de política pública requieren diseños específicos locales para poder ser exitosas.

Contexto

CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, en alianza con prestigiosas universidades y organizaciones sociales de la región y España, ofrece programas de capacitación para navegar los desafíos y liderar las transformaciones que la región y el mundo están experimentando.

En la edición 2023, CAF organizó y dictó el Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública en 20 países de Iberoamérica en alianza con 18 universidades. Durante el Diplomado se impartieron 6 charlas magistrales virtuales.

Expertos y líderes con prestigio internacional dictaron las conferencias, en las cuales, a través de sus experiencias y conocimiento aplicable, compartieron con los estudiantes los principales desafíos, oportunidades, lecciones aprendidas y mejores prácticas en sus áreas de conocimiento.

La serie Cuadernos del Desarrollo está basada en charlas magistrales.

Este cuaderno recoge la intervención de Lucía Dammert, experta en seguridad ciudadana.



RESUMEN
BIBLIOGRÁFICO

Lucía Dammert

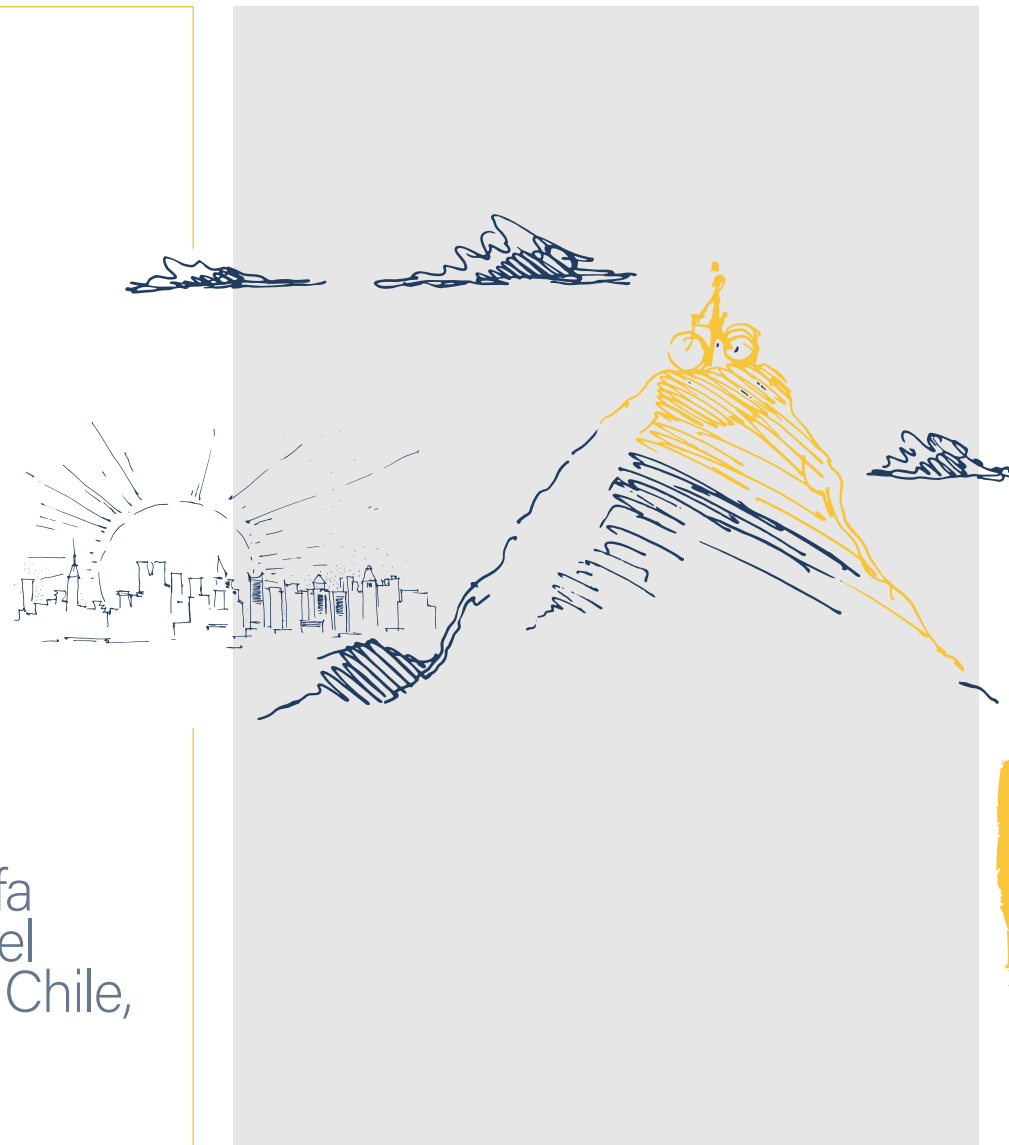
Lucía Dammert es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Ha trabajado con instituciones académicas en Europa, Estados Unidos y América Latina.

Es profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Está especializada en los temas participación comunitaria, seguridad ciudadana y conflictividad social, sobre los que tiene publicaciones académicas.

En la gestión pública, Dammert ha asesorado programas vinculados a la seguridad ciudadana. Ha sido asesora experta en el Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, entre otros organismos regionales y multilaterales.

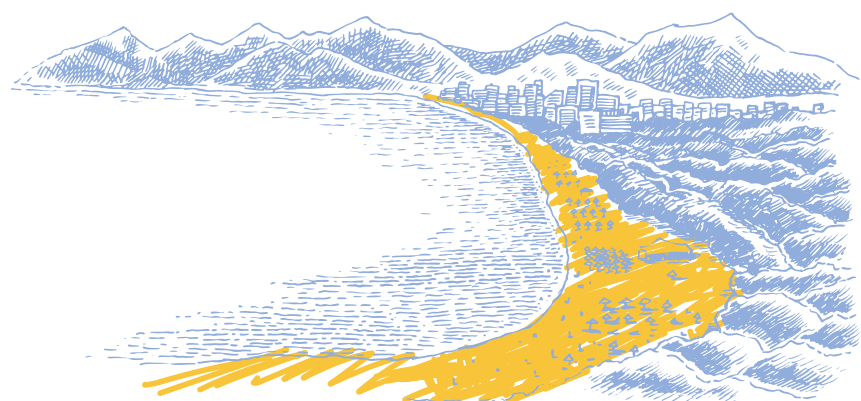


Entre marzo y octubre de 2022, fue la jefa de asesores del presidente de Chile, Gabriel Boric.



INTRODUCCIÓN:

En América Latina, la región más peligrosa del mundo, si se miran las tasas de homicidio ha habido una inversión muy alta en seguridad, pero todavía hay un conocimiento limitado del problema. Los sistemas de información son muy poco confiables y restringen la posibilidad de comprender el fenómeno, mientras la criminalidad se complejiza.



Los tipos de delitos organizados como la trata de personas, el tráfico de migrantes, la minería ilegal o el narcotráfico, así como los más comunes: el robo callejero, de vehículos de los de repuestos de vehículos o celulares, están todavía lejos de una comprensión integral de los motivos de su desarrollo y las formas de implementación.

Esto conduce a una muy baja eficiencia en la respuesta a la criminalidad, que se evidencia no sólo en la resolución del problema sino en la desconfianza de la ciudadanía frente a las instituciones públicas encargadas de prevenir y controlar estos problemas. Adicionalmente, la percepción en la población de América Latina, que vincula inseguridad con corrupción institucional, es elevada. Situación que se torna especialmente patente con la capacidad de los mercados ilegales u organizaciones criminales organizadas para desarrollar su accionar. Es evidente que sin el accionar

activo o pasivo de múltiples instituciones, los mercados ilegales tendrían muchas más restricciones de funcionamiento.

La consecuencia es la mayor deslegitimación del Estado y sus instituciones, así como el aumento del malestar de la ciudadanía con el sistema democrático.

Aunque las mediciones de las violencias y la criminalidad se ven a escala nacional en los promedios de un país, las situaciones y el alcance pueden variar entre territorios de ese mismo país, que en la mayoría de casos no son comparables. Dentro de una misma provincia puede haber zonas con una criminalidad más expandida que el promedio o, por el contrario, una ciudad puede tener tasas de delitos mucho menores que la ciudad vecina. La seguridad no es un capítulo aislado en el aparato del Estado, ni un sector que pertenece solo a un grupo. Esta complejidad reclama políticas locales innovadoras.

Uno de los aprendizajes más relevantes de las últimas dos décadas en América Latina es la necesidad de transversalizar el concepto de seguridad en las políticas públicas y las capacidades de gobernanza, a todo nivel. Sin seguridad, la ciudadanía no puede tener una vida digna.

El diagnóstico

Los homicidios en América Latina

América Latina es la región más violenta del mundo, si se toman en cuenta sus tasas de homicidios. La violencia homicida está vinculada, sobre todo, a los mercados ilegales.

En este contexto, Dammert precisa que la región latinoamericana representa el 8 % de la población del mundo, pero tiene el 30 % de los homicidios. Durante su charla magistral cuestiona el por qué América Latina tiene más homicidios o más muertes que los países que están en situación de guerra.

Según el Estudio Mundial sobre el Homicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que data de 2019, América Latina superó con creces el promedio mundial de 6 casos cada 100 mil habitantes. De hecho, muchos países y ciudades de la región duplican, triplican e incluso tienen tasas casi 10 veces más altas. Es

así como en 2017, casi 4 de cada 10 muertes intencionales ocurrieron en esa zona. Mientras que la tasa de homicidios a escala mundial fue de 6.1 para ese año, en Europa fue de 3.0, en Oceanía 2.8, en Asia 2.3, en África 13.0 y, en América, 17.2. A pesar de las múltiples iniciativas para enfrentar este fenómeno, la mayoría de ciudades con los índices de homicidio más alto del mundo están en América Latina.

Dammert menciona los ejemplos de países con antecedentes menos violentos en comparación con sus vecinos de América Latina. Por ejemplo, Chile, Uruguay y Costa Rica han experimentado aumentos significativos en sus tasas de homicidios.

La experta en seguridad ciudadana señala que la tasa de homicidios en Chile, cada 100 mil habitantes, pasó de 4.5 en 2018 a 6.7 en 2022; en Costa Rica alcanzó los 12 puntos, lo que implica un aumento del 11.56 % respecto a 2021 y en Uruguay se ubicó a 10.7 en 2022, evidenciando un crecimiento del 38 % en la última década.



La victimización y la falta de confianza en la justicia y la policía

Según el Barómetro de las Américas y el Latinobarómetro de 2022, alrededor del 30% de los latinoamericanos consultados han sido víctimas de un delito cualquiera en los últimos 12 meses, lo que Dammert define técnicamente como la "victimización".



Esto significa que más o menos un tercio de la población ha tenido contacto con un hecho criminal, generalmente no resuelto por la justicia. No han recibido una respuesta positiva por parte de los gobiernos, las personas lo entienden como tal, aunque las fiscalías sean autónomas. Entonces, un importante porcentaje de la población se siente insegura, pero, además, recurrir al Estado le genera desconfianza y un profundo sentido de impunidad.

Para Dammert no se puede comparar una persona que fue víctima de un delito violento con una que sufrió un hurto simple.

En su opinión, es importante destacar que el 30 % de la población se siente abandonada por un rol estatal que no se cumple. En 2019, año en que Latinobarómetro preguntó sobre este tema antes de la pandemia de COVID-19, los resultados mostraron una confianza muy baja en la policía, en muchos países con una criminalidad muy extendida.

La especialista asegura que esto sumado a un alto índice de temor en la población, da origen a situaciones como linchamientos (tomarse la justicia por la propia mano), respuestas gubernamentales como la militarización o el aumento del rechazo a la migración.

Dammert hace referencia a la creación de un círculo vicioso entre la falta de confianza, la falta de efectividad y el temor a la delincuencia, lo cual erosiona los pilares de los procesos democráticos de Latinoamérica.

El crimen organizado

Para la experta en seguridad ciudadana, los mercados ilegales en América Latina se han consolidado en los últimos años, resaltando que el de la droga no es el único. Destaca que hay un “creciente y floreciente” mercado de tala ilegal, minería ilegal, trata de personas, tráfico de migrantes, entre otros, que para su funcionamiento requieren de instancias de corrupción institucional.

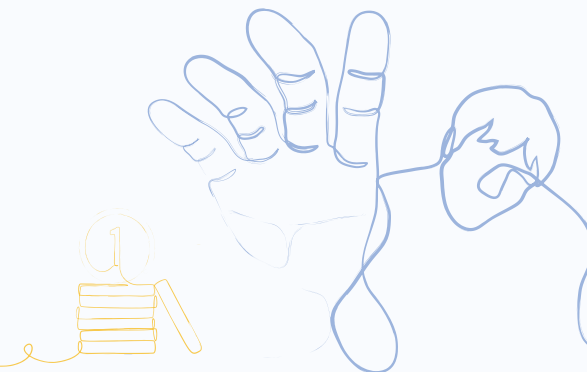
Con respecto al mercado ilegal de la droga, Dammert asegura que sigue creciendo y revela que en América del Sur se produce alrededor del 90 % de la cocaína y, más o menos, entre el 80 % y 90 % se consume en Estados

Unidos. Argumenta que esto genera un “indudable” camino de oferta y demanda que no va a variar “hagamos lo que hagamos”. En su opinión, esta realidad debería producir un debate más profundo sobre las implicaciones de las iniciativas vinculadas con la “guerra contra las drogas”, implementadas en las últimas dos décadas en la región.

Durante la pandemia hubo una sobreproducción de cocaína y un incremento de la demanda interna en Latinoamérica, de acuerdo con revelado por diversos estudios. Dammert explica que hubo una “seria redefinición” de vendedores pequeños, medianos y grandes, así como de las rutas de

comercialización, lo cual podría estar vinculado a un aumento de la violencia en algunas ciudades latinoamericanas.

En su intervención, asegura que las organizaciones criminales en América Latina son industrias: negocios de alta complejidad. Seguidamente, hace referencia a la criminalidad organizada, la de corte transnacional es una “gran” industria que requiere de la legalidad en una parte de su funcionamiento, aunque otra parte opere en la ilegalidad. Destaca que estas organizaciones necesitan sostenibilidad, profesionalismo y capacidad institucional que es muy diferente a lo que se ve en las calles, en el vendedor a menudeo.



Las otras violencias también han crecido

En América Latina, otras violencias han crecido en los últimos años. Para Dammert pasan desapercibidas por la extrema concentración en las violencias criminales, en especial en el narcotráfico.

Menciona la violencia contra las mujeres, las violencias en el espacio público, las violencias en la escuela, en los campos de fútbol. Asimismo, se refiere a la violencia estatal que sigue presente en la región, la cual no solo se limita al abuso o al uso excesivo de la fuerza policial. En su análisis, explica que una parte tiene relación con la manera en la que funcionan los sistemas carcelarios donde los niveles de violencia contra los detenidos son altos y eso incluye a sus familias. Revela que, en muchos casos, quienes están en prisión preventiva o esperando algún tipo de resultado judicial muchas veces son empujados por el sistema a círculos de extrema violencia.

Las consecuencias de la inseguridad

Costos económicos:

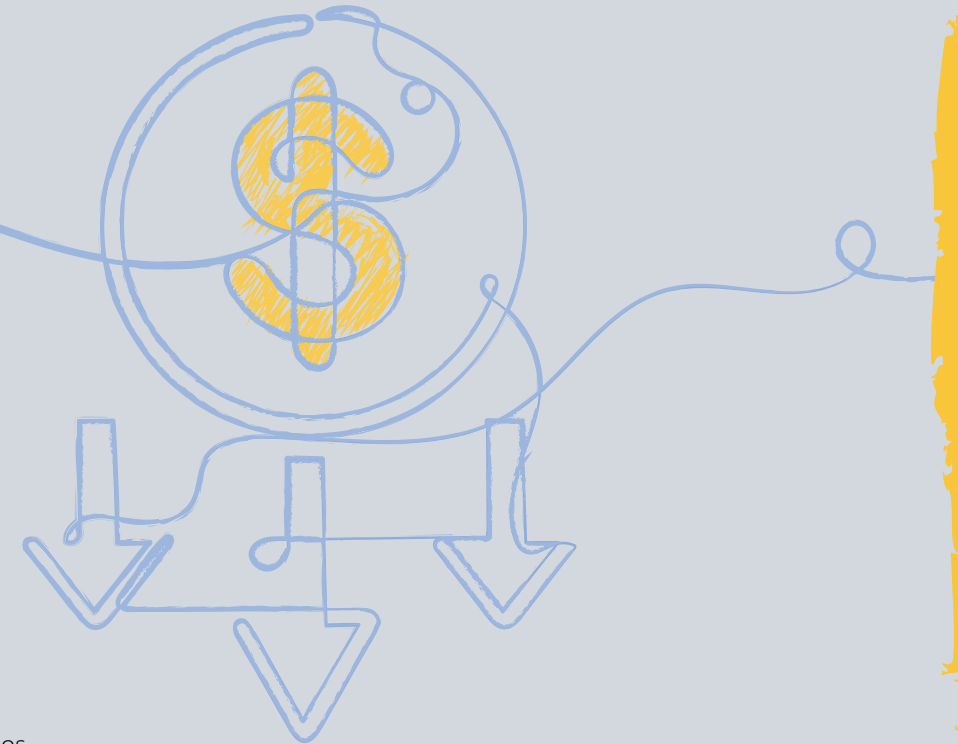
Aumento del gasto público estatal:

El gasto público concentrado en el sistema de justicia criminal, en la mayoría de los países, es enorme: policía, cárceles, poderes judiciales, reformas de la justicia. Una porción significativa de los presupuestos nacionales se destina a ello, especialmente en los países con presencia de organizaciones criminales.

Si se enfrentaran la violencia y la criminalidad de forma más efectiva y eficiente, esos recursos podrían dedicarse a abordar los problemas sociales que son la base misma de la desigualdad en América Latina. Y también podrían utilizarse para modernizar los Estados de la región.

Un mayor costo y gasto individual de los ciudadanos:

En general, los latinoamericanos deben incluir en su gasto cotidiano el costo de la seguridad y la protección. Por ejemplo, alarmas.



Costos políticos

La pérdida de la legitimidad institucional del Estado en su conjunto:

La inseguridad aumenta la desconfianza ciudadana en las instituciones y en las personas que las representan. El rol principal del Estado que es proveer seguridad a sus habitantes, está puesto en duda.

Además, en América Latina se ha desarrollado y fortalecido el populismo punitivo, con discursos castigadores que muchas veces olvidan los limitados resultados de largo plazo que implican estas iniciativas. La voluntad política en la región para desarrollar políticas estructurales de control

y prevención es, en general, liviana. Por lo tanto, las decisiones de políticas públicas tienden a ser muy similares en gobiernos de izquierda o derecha, a pesar de que se ha comprobado que la concentración punitivista no tiene resultado ni pierde lugar.

La desconfianza en el Estado ha conducido al descontento de la población hacia las capacidades de la democracia. Para la especialista, cuando la mitad de los latinoamericanos prefiere otro sistema que no sea el sistema democrático evidencia una distancia, pero también un reproche frente a las promesas centrales no cumplidas.

Costos sociales

Las fuentes regionales, resalta Dammert, evidencian que un porcentaje importante de los encuestados indican que durante los últimos 20 o 25 años no se han resuelto los problemas de la inseguridad.

Con esta certeza, los latinoamericanos sienten limitado el uso del espacio público y se tienden a encerrar en espacios privados, a limitar el uso de la ciudad y aumentar su desconfianza en el otro.



Las paradojas de la seguridad

Al menos, son 8 las principales paradojas de la temática de seguridad que se deben abordar en América Latina. A continuación, un breve análisis.

1.



Una inversión pública muy alta, sin que se avance en el conocimiento del problema ni en las posibles soluciones

Hace ya más de 2 décadas que los gobiernos de América Latina realizan una altísima inversión pública en temas de seguridad. La región ha invertido en tener mejores policías, mejor educados y con mayores dotaciones. Hace 30 años, las policías latinoamericanas tenían educación básica incompleta,

muchas veces no tenían uniformes de calidad, ni tenían acceso a armas.

Eso ha mejorado sustantivamente, pero a pesar de eso, la región no ha avanzado en el conocimiento real del problema y, por lo tanto, tampoco en las posibles soluciones.

2.



La seguridad es una de las principales preocupaciones en Latinoamérica, pero las crisis económicas y de empleo las han superado

Después del COVID-19 ha habido un cambio. La población está más inquieta por la economía, la falta de trabajo, las pocas oportunidades. Según Dammert, que la inseguridad haya dejado de ser una preocupación política mayor

puede deberse a la incapacidad estatal, la falta de entendimiento del problema, la corrupción o incluso la participación de la política en organizaciones criminales, como se ha visto en muchos países donde los jefes de Estado han ido a prisión.

3.



Todos los delitos se meten dentro del saco del crimen organizado

El hecho de que el fenómeno criminal se haya complejizado ha llevado a pensar que todos los delitos o hechos violentos que ocurren están relacionados con organizaciones criminales de corte transnacional.

Por ejemplo, señala Dammert, cuando se piensa que el robo del auto en la esquina de la casa tiene que ver con el Tren de Aragua, referencia para cualquier ciudadano

latinoamericano de lo que es el crimen organizado, se empieza a tener un problema.

En su análisis, esto implica meter todo dentro del esquema de organizaciones criminales que requieren de un tipo específico de políticas públicas de control, de reacción de inteligencia, y de la policía. Además, asegura que esa no es la respuesta necesaria en todos los casos.

4.



Se han implementado iniciativas sin resultados positivos, aunque han sido exitosas en otros contextos del mundo

Dammert se refiere a la policía comunitaria o los diálogos participativos para disminuir el crimen. Aunque hay experiencias en Canadá, Estados Unidos y Europa, la realidad es que en los países latinoamericanos no ha funcionado en su totalidad.

Esto se debe a que los programas que se han puesto en práctica son muy pequeños y no se han sostenido en el tiempo. Argumenta que se ha tratado de proyectos pilotos con nombres de programas exitosos que no se han logrado desarrollar como políticas públicas.



5.

En vez de reformas estructurales y sistemáticas, los Estados optan por respuestas coercitivas y generalizadas que no solucionan el problema

Ante las crisis de las instituciones policiales, en países de Centroamérica, en México, en partes importantes de América del Sur, más que mecanismos de reformas y transformación sistemáticos para mejorar la calidad de la respuesta policial, se ha avanzado en la militarización. Y no solo para enfrentar al crimen, sino para contener protestas, frenar la migración y responder a cualquier problema que genera inseguridad y que la política no sabe cómo abordar.

La experta en seguridad ciudadana afirma que tener las

Fuerzas Armadas sentadas en discusiones de política interna tiene consecuencias para el proceso democrático, porque no hay diferencias entre gobiernos de izquierda y de derecha. Asimismo, señala que es un camino que se está tomando por la desesperación o por la falta de entusiasmo por políticas que sean menos de "mano dura".

Está demostrado que la "mano dura" sólo funciona en el corto plazo. Después, genera rápidamente mutaciones criminales que conllevan al aumento de la violencia, Los ejemplos de estos procesos son múltiples.



6.

Se han hecho reformas judiciales, pero ha aumentado la población carcelaria y hay hacinamiento

Desde los años 90, en América Latina se han hecho reformas a la justicia que prometían más garantías y efectividad, además de penas más apropiadas según el tipo de delito. Sin embargo, la crisis carcelaria es transversal en toda la región. Hay cada vez más reclusos en prisión preventiva, hay hacinamiento y bajos niveles de reintegración o rehabilitación.

El sistema actual ratifica la percepción ciudadana de que hay dos justicias: una para ricos y otra para pobres. Los pobres siempre terminan yendo presos y los ricos cometen otro tipo de delitos como fraudes o corrupción. Dammert afirma que esta es una percepción "muy dañina" para la consolidación de los procesos democráticos de participación de la ciudadanía.



7.



Hay una mayor participación de los gobiernos locales y regionales en programas preventivos, pero se ha creado un exceso de cuerpos policiales propios

Está clara la importancia del involucramiento de gobiernos, sobre todo municipales, en las iniciativas preventivas del delito. Eso promueve la recuperación del espacio público y el reconocimiento de las necesidades específicas de ciertos grupos de la población, sobre todo gente joven. Sin embargo, la tendencia es que haya alcaldes que quieren tener sus propios cuerpos policiales para dar respuestas de control en vez de realizar acciones preventivas.

La experta en seguridad ciudadana explica que esto sucede porque hay una cierta desesperación por resultados y la prevención de un delito parece no darlos rápidamente. En su opinión, crear decenas de instituciones policiales municipales no necesariamente termina teniendo resultados efectivos y provoca el abandono del foco en la prevención del delito, que es un área que en los últimos 5 o 6 años ha perdido mucha fuerza.

8.



Se crearon innovadores programas de participación ciudadana para la seguridad, pero sus miembros tienden a la coerción

En los años 2000, hubo experiencias de participación ciudadana frente al delito en Argentina y Chile que se consideraron como un ejemplo de innovación política democrática.

En la actualidad, dice Dammert, la ciudadanía que hace parte de estos programas es autoritaria, temerosa y está ansiosa por

producir resultados rápidos. En vez de ser espacios participativos de reflexión con una mirada a largo plazo, propician el castigo y piden más policías. Los casos que sí han sido exitosos en la prevención —en Uruguay, Chile y Colombia— han tenido una duración muy corta y los aprendizajes de ellos han sido limitados.



Los desafíos presentes y futuros



1.

No tener una visión sin salida de la situación actual. Por el contrario, Dammert alienta a reconocer que los cambios son posibles. Da el ejemplo de Brasil, donde la tasa de homicidios ha bajado en algunas zonas, aunque la causa no se sepa todavía con exactitud.

Considera que es necesario entender mucho mejor las causas de estos decrecimientos, pero también saber que el elemento fundamental para poder avanzar es la voluntad política en todos los ámbitos y niveles del poder, desde la alcaldía hasta la presidencia.



2.

Entender los problemas con visión local. Lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no es lo mismo que ocurre en el conurbano, y la situación de éste no es equiparable con la de Rosario. Esto es similar en prácticamente todos los países de la región.

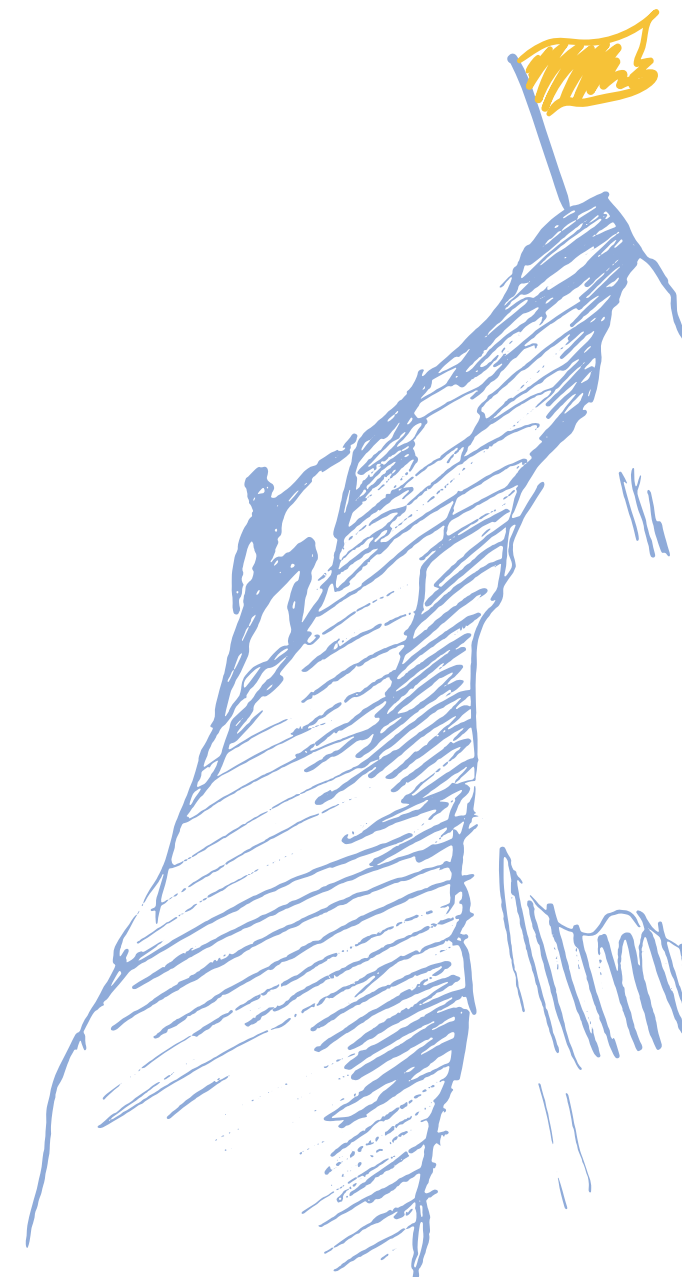
Es necesario enfocar las políticas que sí son manejables según el ámbito desde donde se realizan. Los gobiernos municipales no tienen la capacidad de acabar con el crimen organizado, pero sí pueden abordar la venta callejera, el contrabando, los desórdenes del espacio público.



3.

No renunciar a la prevención del delito y las violencias.

Para la experta en seguridad ciudadana, no todo es control, no todo es policía, no todo es encarcelamiento, o leyes más duras. Es necesario innovar en la gestión pública y eso incluye el uso de las nuevas tecnologías de seguridad. Si se usan para el control, pueden buscarse mecanismos de prevención innovadores que ofrezcan la inteligencia artificial y otras tecnologías, sobre todo en el ámbito local.



Preguntas y respuestas

¿Qué opinión le merece el uso de políticas públicas de seguridad para criminalizar a defensores de derechos humanos y para callar las voces críticas?

Nada puede justificar la persecución de los defensores de derechos humanos. El discurso de la seguridad permite justificar todo tipo de atropellos, por esta razón tiene que haber un cuerpo de gente que esté permanentemente limitando esto.

¿Qué relación encuentras entre el financiamiento político y los problemas de la seguridad?

El tema del financiamiento político es fundamental: mientras los países no tengan políticas claras de cómo limitar y hacer más transparente el financiamiento de los partidos políticos, va a ser imposible contener la vinculación entre organizaciones criminales y la política. Y esto no solamente a nivel nacional, sino especialmente a niveles locales, donde se ha visto que las organizaciones criminales tienen una capacidad, ya no solamente de penetración sino de reorganización.

¿Cuánto hay de realidad en el supuesto impacto en la seguridad de la enorme migración interna dentro de Sudamérica en la última década, principalmente venezolana?

Efectivamente, los datos de la mayoría de estudios plantean que no hay una relación directa entre migración y criminalidad. Lo que sí se está viendo es la presencia de 3 fenómenos importantes.

El primero es que hay una migración absolutamente precarizada que llega a los países de destino a trabajar en el mundo de la informalidad, cuando no de la ilegalidad. Se puede decir que es materia disponible para ser utilizados por organizaciones criminales para pequeños delitos o para la venta de contrabando.

Lo segundo es que esa población viene marcada por una vida, una socialización en la violencia que es muy fuerte. No solamente han hecho el camino de la migración, marcado por la trata, por las violaciones, por el abuso, por el maltrato. Sobre todo, aquellos migrantes que vienen de zonas donde

hay presencia de criminalidad organizada sustancial o hechos de violencia muy cotidianos, reproducen muchos de ellos en países donde eso no era muy común. Esto aumenta, obviamente, la xenofobia.

Y ahí es donde se consolidan los datos. Hay un aumento de población penal migrante, sin duda. ¿Esto es porque hay más criminales migrantes? No, pero sí porque hay más criminales migrantes precarizados, empobrecidos, que no tienen acceso a un abogado o que los mandan directamente a realizar actividades criminales por las que probablemente terminen presos.

Ahí hay también una lógica, pero es importante reconocer que no se va a resolver nada con la xenofobia. Los países que van a recibir migrantes tienen que buscar mecanismos para que esa migración sea regularizada.

Por supuesto, que los países tienen todo el derecho de decir que no tienen capacidad para recibir un número extremo de migrantes y pueden buscar mecanismos de regularización más parciales, como pedir visas de entrada. Todo eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es esperar a que la gente llegue y después, entre comillas, sobreviva como pueda.

Porque la población migrante, y de eso también hay muchos estudios, tampoco sabe de sus derechos en los países de recepción. Entonces, muchas veces terminan metidos, por ejemplo, con grupos que les prestan plata con enormes niveles de interés o terminan siendo casi sumergidos en un proceso casi como de esclavitud por parte de locales, además de otros grupos internacionales. Entonces ahí se necesitan buscar mecanismos de regularización.

Conclusiones

La criminalidad en América Latina lejos de descender, se vuelve un problema más complejo. La región tiene las tasas de homicidios más altas del mundo. Aunque en las últimas décadas ha habido en la región, todavía hay una comprensión y un conocimiento escasos del fenómeno.



Las medidas coercitivas y de “mano dura” dan resultados a corto plazo, pero no ofrecen soluciones duraderas.

Sobre el diplomado

La segunda edición (2023) del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública, de 6 meses de duración, tiene como objetivo debatir los temas estratégicos de desarrollo sostenible de la región, con un enfoque en habilidades y herramientas de innovación pública y gobernabilidad para alcanzar los ODS 2030. Se enfoca en fortalecer habilidades y realizar proyectos prácticos para el desarrollo de los países de la región. La propuesta pedagógica es híbrida, con contenidos virtuales ofrecidos por CAF y otros presenciales que imparten las universidades aliadas.

Este diplomado busca impulsar un liderazgo transformador que permita enfrentar los desafíos actuales y futuros de la región. Tiene más de 1300 estudiantes activos, participando a través de 18 universidades en toda América Latina, el Caribe y España, en 3 idiomas en simultáneo. La formación de 180 horas dispone de 12 lecciones asincrónicas dictadas por expertos internacionales y funcionarios de CAF, así como 10 lecciones virtuales sincrónicas y/o presenciales dictadas por cada universidad aliada. Además, cuenta con un taller virtual sobre la metodología *Design Thinking*, diversos trabajos grupales para desarrollar proyectos y 6 charlas magistrales virtuales.



**Publicación de la Dirección de
Desarrollo Institucional y Capacitación**

**CAF -banco de desarrollo
de América Latina y el Caribe-**

Directora de Desarrollo
Institucional y Capacitación
Nathalie Gerbasi

Esta publicación es un resumen de la clase magistral dictada por Lucía Dammert, en fecha 18 de julio de 2023, en el marco del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública para América Latina, el Caribe y Europa organizado y dictado por CAF junto con 18 universidades en 20 países:

Universidad Católica de Córdoba (Argentina); The University of West Indies (Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago); Universidad Privada del Valle (Bolivia); Fundación Getulio Vargas (Brasil); Universidad Central de Chile; Universidad Externado de Colombia; Facultad de Ciencias Sociales de Costa Rica; Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador); Instituto Diplomático "José Gustavo Guerrero" (El Salvador); Universidad Complutense de Madrid (España); Universidad Pedagógica Francisco Morazán (Honduras); Universidad de Guadalajara (México); ADEN School of Government (Panamá); Universidad Columbia del Paraguay; Pontificia Universidad Católica del Perú; Instituto Tecnológico de Santo Domingo (República Dominicana), Universidad de Montevideo (Uruguay), y Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela).



Redacción de la publicación:
Sandra Lafuente Portillo

Documento supervisado por:

Pablo Rolando, Ejecutivo Principal de la Dirección de Desarrollo Institucional y Capacitación y coordinador del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública

Nota revisada por:
Nathalie Gerbasi, Pablo Rolando

Publicación coordinada por:

Dirección de Comunicación Estratégica de CAF

© 2023 Corporación Andina de Fomento

Las ideas y planteamientos contenidos en esta nota son de exclusiva responsabilidad del expositor de la charla magistral y no reflejan una posición oficial de CAF.



www.caf.com

@AgendaCAF

cursosvirtuales@caf.com